

LA SEGURIDAD JURÍDICA COMO ESCENARIO PARA LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS ESTATALES

Por: GUSTAVO ADOLFO ARANGUREN CÁRDENAS¹

EUCARIS BECERRA HENAO²

ADRIANA HERNÁNDEZ RAMÍREZ³

RESUMEN

La seguridad jurídica, entendida como la certeza que se otorga al individuo o persona jurídica de que sus derechos, bienes y negocios tendrán una protección legal sobre aquellos ataques o violaciones que puedan provenir de particulares o del mismo Estado, marca un derrotero a seguir para su análisis en el marco de la contratación estatal.

Las características de los contratos estatales han convertido a la seguridad jurídica en el punto más importante a la hora de un análisis previo y posterior al realizar negocios jurídicos con el Estado. La inestabilidad en materia normativa, su exceso de leyes y la lentitud en procedimientos, están creando un ambiente poco propicio a la hora de atraer inversionistas, lo que se refleja también en la calidad de los proponentes contractuales.

Las decisiones de la rama ejecutiva, las altas cortes y tribunales judiciales, sobre temas de tanta complejidad como lo son el medio ambiente o los derechos de las comunidades originarias, han dividido opiniones, tanto políticas como académicas, en donde una ponderación de derechos claramente irá

¹ Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: aranguren365@gmail.com

²

Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: eucaris-becerrah@unilibre.edu.co

³

Estudiante de Quinto Año de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira. Contacto: kokorokara725@hotmail.com

direccionada a la protección colectiva, pero también el país tiene compromisos contractuales y debe desarrollar sus fines, creándose así una paradoja en el escenario contractual.

Palabras clave

Seguridad jurídica, Estado social de derecho, contratos estatales, certeza, Colombia, leyes, Corte Constitucional, infraestructura.

ABSTRACT

Legal security, understood as the certainty that is granted to the individual or legal entity, that their rights, assets and businesses will have legal protection, over those attacks or violations that may come from particular agents or from the same State, becomes the central axis of this essay.

The characteristics of state contracts have turned legal security into the most important point at the time of a prior and subsequent analysis of conducting legal business with the State, instability in normative matters, its excess of laws and the slowness in procedural, they are creating an unfavorable environment when it comes to attracting investors, which is also reflected in the quality of the contract proponents.

The decisions of the high courts and judicial tribunals, on topics as complex as the environment or the rights of the original communities, have divided political and academic opinions, where a weighting of rights, clearly will always be addressed to the collective protection, but also the country has contractual commitments and must develop its goals, creating a paradox in the contractual scenario.

Keywords

Legal security, Social State of Law, state contracts, certainty, Colombia, Laws, Constitutional Court, infrastructure.

INTRODUCCIÓN

El Estado colombiano es visto por los agentes comerciales privados, como una opción de valor a la hora de establecer relaciones de negocio. El Estado, en esa búsqueda por cumplir sus fines, se ve abocado a establecer figuras contractuales variadas, en especial en materia de obras públicas, ya sean en materia de infraestructura, explotación minera etc. En estas obras las empresas privadas juegan un papel importante, bien como ejecutores, financiadores o administradores de la misma.

La seguridad jurídica, como principio rector de todo el ordenamiento jurídico, es el eje central de este ensayo de reflexión, es por ello que es conveniente conocer cómo se desarrolla este concepto. Así pues, a través de definiciones de varios autores, se establece que la certeza que los agentes tienen sobre el devenir de una actuación legal, y la garantía que el Estado ofrece para establecer unas consecuencias en la realización de cualquier acto que perturbe el normal suceder de las relaciones entre los individuos. A esto, se le denomina seguridad jurídica.

En materia contractual estatal la seguridad jurídica, se convierte en la garantía para que el sector privado pueda hacer un contrapeso a la preminencia que tiene el Estado a la hora de realizar un contrato, pero este fin se ve debilitado cuando se encuentra con unas instituciones, que con sus actuaciones generan un manto de dudas y alimentan la desconfianza y el temor de invertir en la realización de obra pública.

El poder del ejecutivo, en sus entidades descentralizadas, crea un cuello de botella a la hora del desarrollo de proyectos estatales del orden regional, ya sea por la excesiva burocracia o la corrupción de los servidores públicos. Otra institución, como es el Congreso de la República, se ha convertido en una fuente de inseguridad jurídica, ya que el populismo normativo se ha tomado gran parte de los proyectos legislativos, dejando de lado los análisis técnicos a la hora de promulgar las leyes. Dentro de este análisis se observa cómo las decisiones judiciales, en especial las de las altas Cortes, apoyadas en la protección del medio ambiente y de las comunidades, han movido los cimientos de la contratación estatal, generando una desconfianza inversora a nivel nacional, y más aún a nivel internacional.

Para aterrizar más el concepto de seguridad jurídica, su importancia y las consecuencias que conlleva la creación de un ambiente de inseguridad, en este documento se presentarán algunos casos referentes, los cuales estuvieron o se encuentran aún en la palestra pública, como por ejemplo las consultas populares para frenar proyectos mineros, las licencias ambientales y el caso de la compañía con capital extranjero “Electricaribe”.

Así pues, los intereses del gobierno de pertenecer a organizaciones económicas internacionales y respetar los acuerdos económicos transnacionales económicos firmados, se contraponen a la protección que el Estado debe brindar a sus nacionales en ejercicio de su soberanía, garantizando un respeto a las comunidades y un cuidado del medio ambiente, creando una paradoja interesante que será el sustrato de este ensayo.

1. CONCEPTUALIZACIÓN DE LA SEGURIDAD JURÍDICA

Uno de los principios más importantes del ordenamiento jurídico, y a su vez del derecho, es el principio de seguridad jurídica. En los últimos tiempos vemos

cómo cada vez más se habla de este principio en los medios de comunicación, en los debates políticos y en los foros académicos y económicos, por lo que, para el tema que nos atañe, es fundamental señalar algunas definiciones que nos darán luces para identificar la importancia que en la celebración de contratos estatales tiene la seguridad jurídica.

Por la importancia del tema, las altas Cortes han realizado variadas contextualizaciones respecto a la seguridad jurídica. Es así como el ex magistrado y ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (RAMÍREZ B., 2006), manifiesto:

La seguridad jurídica, en términos generales, se entiende como la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente tutelados, interdicción de la arbitrariedad, de modo que permite en el ciudadano el nacimiento de una expectativa razonablemente fundada en cuál ha de ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho, supone una estrecha relación con la justicia porque la ley como sistema conforma un campo de garantías tanto en su aplicación como en su misma interpretación, sometida a determinados cánones que impiden la arbitrariedad de los operadores del mismo, entre ellos la observancia estricta de los principios de legalidad e igualdad, que irradian todo el sistema e implica el respeto por la cosa juzgada, que también es un derecho fundamental (p. 1).

Desde el punto de vista de la economía institucional, la seguridad jurídica es vista como el efecto que se desprende de un ordenamiento jurídico, en el cual un conjunto de normas determinadas permite dar un orden a las acciones de los individuos en sociedad, haciendo predecible la consecuencia de sus actos (NORTH, 2001).

El Banco Mundial, como parte del programa *Governance Matters*, realiza una definición del concepto anglosajón de seguridad jurídica “*Rule of Law*”, en la que plantea que la confianza en las normas de una sociedad, y en el cumplimiento de las mismas, debe ser percibida por los agentes que conforman la misma, y a su vez esta confianza se debe trasladar al momento de la celebración y ejecución de contratos en el ejercicio de los derechos de propiedad, y en las actuaciones de los jueces y organismos de seguridad.

Con lo mencionado anteriormente podemos establecer que, en un Estado social de derecho, como es el nuestro, es esencial que exista una certeza sobre el concepto de que determinados actos tengan una consecuencia jurídica, e impone al Estado el peso de cumplir con sus obligaciones, es decir que, en materia contractual, quien celebre un negocio, el acuerdo y resultado de este no sea burlado, y menos aún por el Estado.

2. SEGURIDAD JURÍDICA EN MATERIA CONTRACTUAL

Cuando hablamos de contratación es inevitable remitirse a la normativa del Código Civil (2018), donde nos habla de un principio fundamental en materia contractual, como lo es la “Autonomía de la Voluntad”, el cual en materia negocial entre sujetos privados marca el derrotero de todo contrato. La norma mencionada, en los artículos 16 y 1602, entre otros, establece que “*todo contrato legalmente celebrado es una ley para los contratantes y sólo puede ser invalidado por consentimiento mutuo o por causas legales*” (Código Civil, 2018), indicando claramente que en su creación y ejercicio debe prevalecer el acatamiento del orden público y las buenas costumbres, con lo que es claro que la autonomía de la voluntad llega hasta el limitante que establezca el Estado.

La jurisprudencia también se ha encargado de dar un valor significativo a la autonomía de la voluntad en materia contractual, de allí que establezca que de este principio se desprenda que a los particulares les esté permitido:

i) celebrar contratos o no celebrarlos, en principio en virtud del solo consentimiento, y, por tanto, sin formalidades, pues éstas reducen el ejercicio de la voluntad; ii) determinar con amplia libertad el contenido de sus obligaciones y de los derechos correlativos, con el límite del orden público, entendido de manera general como la seguridad, la salubridad y la moralidad públicas, y de las buenas costumbres; iii) crear relaciones obligatorias entre sí, las cuales en principio no producen efectos jurídicos respecto de otras personas, que no son partes del contrato, por no haber prestado su consentimiento, lo cual corresponde al llamado efecto relativo de aquel (CORTE CONSTITUCIONAL, 2013, p. 14).

En el contrato estatal la autonomía de la voluntad pierde su esencia, ya que la entidad del Estado contratante no tiene libertad a la hora de contratar. La ley le indica a la entidad una serie de limitantes previos a la celebración del contrato, los cuales tienen un carácter de obligatorio cumplimiento y en los que la inclusión de cláusulas de cumplimiento, garantía, sancionatorias, etc. (cláusulas exorbitantes) dan a la administración la dirección y control de la celebración y ejecución del contrato, caracterizadas esencialmente por la inaplicabilidad de algunos principios contractuales del derecho civil, toda vez que, precisamente, al practicarse quebrantan la igualdad y conmutatividad propias del acuerdo de voluntades (CONSEJO DE ESTADO, SECCIÓN TERCERA, 2003).

Con lo mencionado en las líneas anteriores es de esperar que los particulares, al momento de contratar con el Estado, busquen suplir esa desigualdad de partes en la que se encuentran con un ordenamiento jurídico sólido, unas

instituciones eficientes y unas condiciones de gobernabilidad estables. Cabe resaltar que los modelos de contratación estatal tienden cada vez más a tener una mayor participación privada.

Figuras como el contrato de concesión o las APP han hecho que el panorama de la contratación cambie, ya que inversionistas extranjeros se están interesando cada vez más por hacer parte de estos modelos de contratación con el Estado. En materia comercial, empresarial y de inversión resulta significativa la existencia de una certidumbre, la que inevitablemente tiene su repercusión en el desarrollo y crecimiento del país. Esta certidumbre se logra de manera sustancial en consonancia con la variabilidad normativa.

El interés de Colombia de pertenecer a grupos económicos internacionales, como por ejemplo la OCDE, hacen que el Estado deba garantizar un modelo jurídico que ofrezca a los inversores propios y extranjeros unas condiciones ideales para la celebración de contratos.

Aunque los esfuerzos de asegurar un entorno pacífico, que atraiga esa inversión que el país necesita y que pueda desarrollar esos grandes proyectos de desarrollo, han sido grandes, ejemplo el proceso de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), también es cierto que una serie de acontecimientos en el ámbito jurídico han hecho que se diluya esa confianza ganada.

Al momento de generar confianza en nuestras instituciones los casos de corrupción se han evidenciado en mayor medida en estos últimos tiempos; nombres como los hermanos Nule, Odebrecht y otros, se han convertido en escándalos de repercusión nacional e internacional. Aunado a esto, las últimas decisiones de las Cortes o Tribunales judiciales han hecho que el panorama inversionista ponga el freno y analice con más detenimiento cualquier proyecto en el que quisiera invertir.

La otrora confianza jurídica que se creía desprendía Colombia se ha convertido en un manto de dudas para todo inversor, y más aún a la hora de contratar con un Estado que no puede ofrecer unas condiciones adecuadas para la celebración de contratos. Un ejemplo de ello es el último resultado del informe *Doing Business*, elaborado para el Banco Mundial (2019), el cual, en los apartados de facilidad para la creación de empresa y cumplimiento de contratos, dejan mal parados al país.

El informe *Doing Business* (Banco Mundial, 2019) establece unos indicadores que son revaluados año a año, los cuales arrojan una medición con respecto a cómo los Estados favorecen o desfavorecen la actividad empresarial y el ejercicio de derechos de propiedad. En el año 2018 este informe presentó unos datos no muy alentadores en materia de confianza inversionista, donde se descendió cuatro puestos, ocupando la posición 59 entre 190 países (p. 1).

En el índice de “cumplimiento de contratos” se mide el tiempo y el costo para resolver una disputa comercial a través de un tribunal de primera instancia local, así como el índice de calidad de los procesos judiciales, evaluando si cada economía ha adoptado una serie de buenas prácticas que promuevan la calidad y la eficiencia en el en el sistema judicial. Para el año 2018 se ocupó en este índice el puesto 177 de 190. Este fue el resultado global de Colombia:

Tabla 2-1. *Doing Business 2018-2017*: Posición obtenida por Colombia, escalafón general, índice de facilidad de hacer negocios y áreas

Posición en el escalafón general / Áreas	Posición en el escalafón			Calificación de distancia a la frontera (DAF) ¹		
	2018	2017 ²	Variación	2018	2017 ²	Variación
Facilidad de hacer negocios	59	55	-4	69,41	69,52	-0,11
Número de países	190	190		-	-	-
Apertura de una empresa	96	61	-35	85,32	89,57	-4,25
Manejo de permisos de construcción	81	34	-47	68,71	76,54	-7,83
Obtención de electricidad	81	74	-7	74,18	73,73	0,45
Registro de propiedades	60	53	-7	71,34	73,29	-1,95
Obtención de crédito	2	2	0	95,00	95	0
Protección de los inversionistas minoritarios	16	13	-3	73,33	73,33	0
Pago de impuestos	142	139	-3	59,08	58,91	0,17
Comercio transfronterizo	125	121	-4	62,83	62,83	0
Cumplimiento de contratos	177	174	-3	34,29	34,29	0
Resolución de la insolvencia	33	33	0	70,02	71,74	-1,72

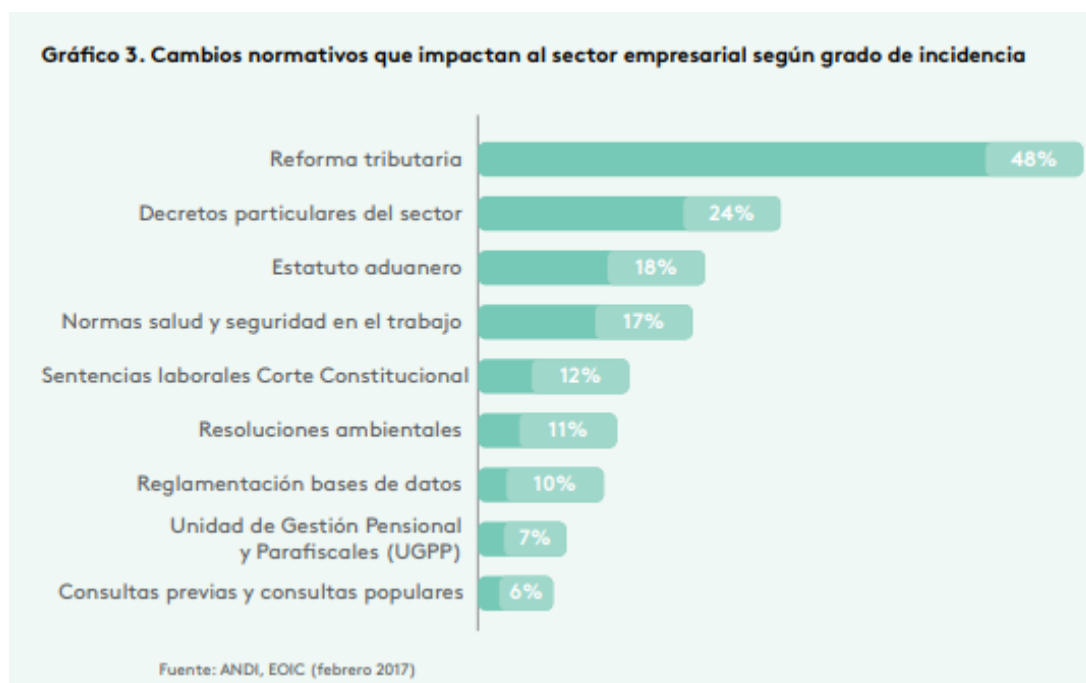
Fuente: Banco Mundial (2018). *Doing Business*. Informe para Colombia.

ANDI (2017), escenario de seguridad jurídica, está encontrando en el mismo Estado situaciones que ponen en evidencia la fragilidad legislativa e institucional, lo cual conlleva a generar desconfianza en los sectores productivos del país. Es así como en la Encuesta Opinión Industrial Conjunta (EOIC), elaborada por la Asociación Nacional de Industriales de Colombia (ANDI, 2017), arrojó como resultado que un 75,2% del total de las empresas afiliadas a esta agremiación, en los últimos dos años, han tenido por lo menos una variación representativa, producto de una determinación o resolución de alguna institución estatal, así:

- | | |
|--|--------|
| a) Decretos y resoluciones Ministerios | 86,4 % |
| b) Leyes del Congreso | 67,9% |
| c) Decisiones de agencias sectoriales | 37,1% |
| d) Corte Constitucional | 25,0% |
| e) Jueces ordinarios | 22,1% |

Se demuestra así que el Ejecutivo, con la expedición de decretos y decisiones sectoriales, los cuales casi siempre están acompañados de elementos técnicos válidos, necesitan una mayor estabilidad, que se produzca una simbiosis entre criterios técnicos y sociales con perdurabilidad, y consistencia normativa.

Colombia se ha caracterizado por un exceso normativo, y es así como el Congreso de la República se presenta como otra causa de la inestabilidad jurídica. Sabemos que los parlamentarios se rigen por intereses políticos, regionales, económicos y hasta por intereses dudosos, situación que es propicia para que exista un exceso de iniciativas legislativas, la mayoría de ellas sin un fundamento profundo, y motivadas más bien por lo que comúnmente se conoce como populismo, lo cual crea un ambiente de inestabilidad, que para el sector productivo refleja la siguiente incidencia:



Fuente: ANDI, EOIC (2017).

Las autoridades del orden departamental y municipal experimentan también una incertidumbre en torno a su competencia a la hora de establecer requisitos

en materia contractual, puesto que se han encontrado procedimientos dispares entre entes territoriales a la hora, por ejemplo, de otorgar licencias ambientales.

A su vez, el fenómeno de las consultas populares para la aprobación de proyectos que afecten en cierta medida a las comunidades ha tomado fuerza, obligando en ocasiones a suspender o cancelar proyectos, que como consecuencia han acarreado demandas a la nación por incumplimientos contractuales.

Vistas estas cifras, desde el punto de vista empresarial, son graves, ya que reflejan el descontento que este sector siente ante los procesos contractuales llevados a cabo con el Estado. Se tiene claro que el ánimo de lucro es la motivación principal para que un privado despliegue toda una serie de recursos monetarios y técnicos a la hora de establecer una relación negocial, pero esto no puede ser excusa a la hora de demonizar a este sector y crear una serie de trabas normativas que lo único que hacen es dar una imagen de Estado burocrático e incapaz de establecer reglas claras y procedimientos ágiles, sin que por esta razón dejen de ser rigurosos a la hora del cumplimiento de los fines del Estado.

3. ESCENARIOS PROMOTORES DE INSEGURIDAD JURÍDICA

3.1. CONSULTAS POPULARES

La Corte Constitucional (2016) ha emitido fallos que han impactado el desarrollo económico de país; dentro de los más importantes podemos encontrar aquellos sobre la protección de las comunidades y el medio ambiente, donde el máximo Tribunal Constitucional otorgó a los entes territoriales la competencia para establecer reglas a la hora del uso del suelo y el subsuelo, las cuales anteriormente se entendía que por disposición

constitucional (art. 332) estaba en cabeza del Estado, la interpretación de esta disposición normativa estableció que la noción de Estado, como garante de los recursos naturales, abarcaba también a los entes territoriales, con lo cual abrió las puertas para la realización de una consulta popular en el municipio de Pijao, Tolima, para prohibir o no, una actividad minera, situación que trascendió a otros municipios con conflictos mineros similares.

Las consultas populares como mecanismo de participación ciudadana han tomado gran relevancia en el panorama nacional, más aún en los últimos años, cuando se están presentando disputas entre comunidades y las empresas encargadas de la realización de proyectos que las afecte en cierta manera.

Con este mecanismo el presidente, gobernador o el alcalde tienen la facultad de convocatoria a la ciudadanía, para que en las urnas una comunidad específica se pronuncie respecto a alguna decisión adoptada, la que es vinculante y obligatoria en su cumplimiento.

Para el sector privado la decisión de la Corte Constitucional fue tomada como un golpe certero a la confianza inversionista, ya que, por vía de una consulta popular, se podría modificar cualquier licencia o contrato en el que una comunidad sienta afectados sus derechos. Con este fallo se vino una seguidilla de decisiones de las altas Cortes, todas ellas dentro de una línea liberal, en la que la protección del medio ambiente y de los derechos de las comunidades, en especial de aquellas con minorías étnicas (indígenas o negritudes), están por encima de cualquier interés privado y del Estado, por mucho que se justificase la realización de un proyecto.

Sin embargo, debido a los cambios de magistrados de la Corte Constitucional, el concepto respecto a las consultas populares a la hora de decidir sobre la explotación de recursos no renovables dio un giro, y lo hizo a través de la Sentencia SU-095 (2018), donde nuevamente se acogió la tesis en la que la

Nación es quien tiene la competencia respecto al subsuelo y sus recursos, dejando sin piso jurídico la decisión tomada mediante consulta popular por la comunidad del municipio de Cumaral, Meta, la cual paralizaba el proyecto petrolero que pretendía establecerse en dicho municipio.

En la sentencia de la Corte Constitucional (2018) se recalca que los municipios no pueden tener injerencias sobre temas como la explotación del subsuelo, ya que estos afectan y son responsabilidad de la Nación. Para intentar matizar las consecuencias de los bandazos dados por la Corte, esta insta a llegar a unos acuerdos con las comunidades para lograr una concertación y establecer unos parámetros a la hora de la realización de proyectos de extracción de recursos naturales, todo esto mientras el Congreso de la República, por vía legislativa, diseña el mecanismo en el cual en el futuro estas controversias entre comunidad, privados y Estado, puedan ser solucionadas.

Se puede evidenciar cómo dentro de un solo tema, las consultas populares, a la hora de la realización de proyectos de uso del subsuelo, la Corte Constitucional (2018) dio unos bandazos en materia jurisprudencial, los cuales tienen consecuencias económicas importantes para el país.

3.2. LICENCIAS AMBIENTALES

Es uno de los temas más complejos a la hora de valorar la seguridad jurídica del Estado, ya que lastimosamente el país no cuenta con una normatividad que trace una hoja de ruta clara a la hora de establecer los requisitos y qué procedimientos debe tener en cuenta el contratista al momento de solicitar una licencia ambiental, aspecto por el que se ha frenado la ejecución de proyectos, de suma importancia para las regiones, ya que las Corporaciones Autónomas Regionales, instituciones de creación constitucional, y quienes tienen la facultad de expedir las licencias ambientales, en ocasiones carecen de uniformidad de criterios a la hora de su expedición, situación que hace que

contratos de obras grandes, como lo serían los de infraestructura vial, energética, o los que más problemas han tenido, los de extracción de minerales, sufran grandes retrasos o algunas veces ni se pueden llevar a cabo.

En los contratos de Asociaciones Público-Privadas (APP), al momento de la presentación de la iniciativa de creación de dicha figura, en su etapa de factibilidad, se deben aportar estudios ambientales. La duda o inseguridad jurídica surge cuando existen varias iniciativas de APP.

Cada una tendría que tramitar una licencia, situación crear un mercado de licencias, que puede dar cabida a eventos de corrupción, o a un monopolio donde las grandes compañías sean las que obtienen dichas licencias. Se evidencia cómo la falta de certeza en los trámites trastocan el espíritu de las licencias ambientales, las cuales deben propender por la protección de los derechos colectivos al medio ambiente, y aquellos derechos fundamentales que de esta protección se desprenden (CORTE CONSTITUCIONAL, 2012).

3.3. CASO ELECTRICARIBE

En el Tribunal de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI, 2018), se encuentra una demanda instaurada por la compañía de capital español, Gas Natural Fenosa, en representación de su filial en Colombia, Electrificadora del Caribe (Electricaribe) S.A. E.S.P., en la cual solicita que, por concepto de compensación, le sea pagada la cifra de mil millones de dólares, alegando la inseguridad jurídica a la que se vio sometida por parte del Estado colombiano quien en últimas terminó cancelando la licencia de operación a esta empresa, situación que es calificada por los demandantes como una clara “expropiación”.

Esta relación contractual a la hora de la creación de Electricaribe determinó que el porcentaje de participación del consorcio español fuera de un 85%, y

un 15% estuviera en manos del Estado, pero la compañía energética no cumplió a cabalidad con sus obligaciones, convirtiéndose la prestación del servicio de energía a los habitantes del norte de Colombia en un dolor de cabeza para sus usuarios, ya que los continuos cortes y las altas y bajadas súbitas de la corriente, ocasionaron que miles de electrodomésticos se dañaran, generando protestas y campañas para el no pago de los recibos de energía.

Los congresistas y demás políticos del bloque Caribe iniciaron una campaña para solicitarle al gobierno la liquidación e intervención de la electrificadora, presión que fue tal, que llevó al gobierno a intervenir a Electricaribe y liquidar el contrato por el incumplimiento en la renovación de la infraestructura energética de los departamentos donde tenía injerencia.

Las voces de protesta del gobierno español no tardaron en oírse, así como las observaciones realizadas por la OCDE (2017), en las cuales ven con preocupación casos como este, donde sienten que las inversiones extranjeras no cuentan con una protección, y que además se encuentran en desventaja con competidores nacionales.

Este caso tiene su complejidad a la hora del análisis contractual, puesto que es claro que el Estado, en cumplimiento de sus fines (Constitución, art. 2°), debe garantizar la prestación de unos servicios públicos en condiciones idóneas, y su facultad a la hora de sancionar a las empresas que incumplan sus obligaciones es la manera de ejercer control y salvaguardar los intereses de la nación, todo ello soportado en la soberanía dada por la constitución y las leyes, pero ¿hasta qué punto el mundo globalizado al que quiere pertenecer el Estado colombiano puede tener injerencia en las decisiones que tome este en ejercicio de su soberanía? Puede parecer que el precio de pertenecer a estos clubs de países sea creando una seguridad jurídica global, en menoscabo de la defensa de los intereses nacionales.

CONCLUSIONES

Con lo anteriormente expuesto se evidencia la importancia que la seguridad jurídica tiene a la hora de la contratación estatal. Los sectores privados, quienes se mueven únicamente por la consecución de un lucro, el cual es válido y para nada reprochable, buscan un ambiente sin sobresaltos a la hora de intervenir en una relación contractual con el Estado.

Ahora bien, aunque este documento se encuentre enfocado en analizar la seguridad jurídica desde el punto de vista de la contratación con el Estado, no es de olvidar que todas estas relaciones jurídicas, como todas las ramas del derecho, están sufriendo una constitucionalización, producto del Estado social de derecho.

Así las cosas, la injerencia de la Corte Constitucional mediante sus fallos crea otra vía válida, la cual hace pensar que no todo vale a la hora del cumplimiento de los fines del Estado, ni mucho menos se pueden abanderar proyectos de infraestructura o mineros en detrimento de los recursos naturales, los cuales deben ser salvaguardados por todas las instituciones estatales.

Con esto se observa con preocupación que uno de los tantos giros que están dando nuestras altas Cortes ahora se adopte una línea conservadora, la cual se encuentra anteponiendo los intereses de los privados al interés general, de ahí la reacción de las comunidades, las cuales, al no encontrar la protección de su territorio por parte del gobierno nacional, busca los mecanismos legales y hasta las vías de hecho para poder hacerlo, situación que puede ser contraproducente en el escenario de postconflicto en el que se encuentra Colombia.

Por último, se debe establecer un panorama integrador, en el que la solidez de las instituciones del Estado, junto con una línea ponderada de los Tribunales judiciales a la hora de emitir sus fallos, y el respeto por la soberanía por parte de la comunidad internacional, sean la carta de presentación para que los particulares puedan ver en las instituciones estatales los socios ideales a la hora de contratar, y así poder llevar a cabo el cumplimiento cabal de los fines del Estado.

BIBLIOGRAFÍA

ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE (1991). *Constitución Política de Colombia*. Bogotá, Colombia.

ASOCIACIÓN NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA (ANDI) (2017). *Estrategia para una nueva industrialización II*. T. 9. *Seguridad jurídica Importancia de la seguridad jurídica para el crecimiento y la inversión*. Bogotá: ANDI.

AYLLÓN, S. L. (2004). *Globalización, estado de derecho y seguridad jurídica: una exploración sobre los efectos de la globalización en los poderes judiciales de Iberoamérica*. México: Suprema Corte de Justicia de la Nación.

BANCO MUNDIAL (2017). *Doing Business 2018. Reformando para la creación de empleos*. Disponible en: <https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/Publicaciones/Doing%20Business%202018.pdf>

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (1993). *Ley 80*. Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Diario Oficial N° 41.094. Bogotá: Imprenta Nacional.

CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA (2007). *Ley 1150*. Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993, y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos. Diario Oficial N° 46.691. Bogotá: Imprenta Nacional.

CONSEJO DE ESTADO (2013). Sentencia de octubre 24. Rad. 2000-02857. Disponible en: https://www.procuraduria.gov.co/relatoria/media/file/flas_juridico/700_CE-Rad-24697.doc+&cd=3&hl=es-419&ct=clnk&gl=co

CORTE CONSTITUCIONAL (2012). Sentencia C-746. M.P. Luis Guillermo Guerrero. Disponible en: <https://justiciaambientalcolombia.org/wp-content/uploads/2013/02/sentencia-c-746-12-mp-luis-guillermo-perez-1.pdf>

CORTE CONSTITUCIONAL (2013). Sentencia C-934. M.P.: Nilson Pinilla Pinilla. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2013/C-934-13.htm>

CORTE CONSTITUCIONAL (2016). Sentencia C-445. M.P.: Jorge Iván Palacio Palacio. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-445-16.htm>

CORTE CONSTITUCIONAL (2018). Sentencia SU-095. M.P.: Cristina Pardo Schlesinger. Disponible en: <http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2016/t-445-16.htm>

CREMADES & SOTELO (2017). *Informe sobre la seguridad jurídica y la protección a la inversión en Iberoamérica. Una consideración específica de los sectores regulados de la energía y las telecomunicaciones*. Disponible en: https://www.cremadescalvosotelo.com/sites/default/files/pdf_informe_final_en_espanol_13_03_16.pdf

KAUFMANN, D.; AART K. & MASSIMO M. (2008). "Governance Matters VII: Aggregate and Individual Governance Indicators 1996-2007". In: *Policy Research Working Paper 4654*, The World Bank Development Research Group Macroeconomics and Growth Team & World Bank Institute Global Governance Program, June.

NORT, D. (2001). *Instituciones, cambio institucional y desempeño económico*. México: Fondo de Cultura Económica.

RAMÍREZ B., Y. (2006). "Seguridad jurídica". En: *Revista Corte Suprema*. Año 9. N° 21. Bogotá: Imprenta Nacional de Colombia.